

COLOMBIA DESDE FUERA. A CRUCIAL DECADE OF COLOMBIAN HISTORY IN THE ITALIAN DIPLOMATIC REPORT

Resumen

El presente artículo de investigación recorre la historia colombiana del Bogotazo a los exordios del Frente Nacional a través de la perspectiva diplomática italiana. La investigación, de tipo cualitativo y fundada en la documentación del Archivo Diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano, rescata la visión que los representantes de Roma dieron de una década crucial para la república latinoamericana y sus conexiones con el entorno regional e internacional. Los juicios de la misión italiana se presentan como una muestra de la atención que la diplomacia europea brindó a procesos y acontecimientos colombianos. Como tales, ellos pueden contribuir a una comprensión más exhaustiva de la historia de Colombia por ofrecer una lectura *desde fuera* que tenga en cuenta la mirada de observadores externos.

Palabras clave

Relaciones internacionales de Colombia, Italia, Bogotazo, Rojas Pinilla, Frente Nacional.

Abstract

This research article describes the Colombian history from the *Bogotazo* to the beginning of the *Frente Nacional* looked through the perspective of the Italian diplomacy. The study, of qualitative type and based on records of the Historical Diplomatic Office at the Italian Ministry of Foreign Affairs, highlights the vision given by representatives of Rome about a crucial decade for the Latin American Republic and its connections with the regional and international situation. The evaluation of the Italian mission is presented as a sign of the attention given by the European diplomacy has given to Colombian processes and events. Therefore, they can contribute to a more comprehensive understanding of Colombia's history by offering a different reading from the viewpoint of an outside observer.

Keywords

International Relations of Colombia, Italy, Bogotazo, Rojas Pinilla, National Front.

Referencia: Palamara, G. (2017). Colombia *desde fuera*. una década crucial de la historia colombiana en el relato diplomático italiano. *Cultura Latinoamericana. Revista de Estudios Interculturales*. 26(2), pp. 20-52. DOI: 10.14718/CulturaLatinoam.2017.26.2.2

COLOMBIA DESDE FUERA. UNA DÉCADA CRUCIAL DE LA HISTORIA COLOMBIANA EN EL RELATO DIPLOMÁTICO ITALIANO

*Graziano Palamara**

Universidad Externado de Colombia

DOI:10.14718/CulturaLatinoam.2017.26.2.2

Introducción

Este trabajo quiere subrayar la utilidad de investigar la percepción de los mayores hitos históricos colombianos por parte de las diplomacias europeas. Semejantes estudios se hacen necesarios para acercarse a una reflexión unitaria de la historia internacional de Colombia y enriquecer el panorama de las coordenadas interpretativas para descifrar el desarrollo histórico del país¹.

Como muestra de la percepción europea sobre los procesos y las dinámicas históricas colombianas, el ensayo rescata y examina las evaluaciones de la diplomacia italiana. La reflexión se centra en la década 1948-1958 y en todos esos acontecimientos que, desde el Bogotazo hasta los exordios del Frente Nacional, dieron un giro a la historia contemporánea de Colombia y a las conexiones del país con el entorno regional e internacional.

* Ph.D. en Teoría e Historia de las Instituciones Políticas Italianas y Comparadas - Università degli Studi di Salerno (Italia). Desde el 2007 hasta el 2011 fue docente de Historia de las Relaciones Internacionales en la Universidad de la Toscana de Viterbo (Italia). Desde el 1 de agosto del 2012 hasta el 31 de mayo de 2015 fue docente de planta de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Católica de Colombia, en convenio con la Università di Salerno. Investigador Asociado (Colciencias), actualmente es profesor de la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y miembro del grupo de Investigación OASIS. Contacto: graziano.palamara@uexternado.edu.co

El artículo es fruto del proyecto de investigación América Latina e Italia. Las relaciones políticas y diplomáticas al comienzo de la Guerra Fría (1949-1958), adscrito al grupo del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales (OASIS) de la Universidad Externado de Colombia.

Fecha de recepción: 2 de mayo de 2017; fecha de aceptación: 4 de junio de 2017.

1. En las últimas décadas, los análisis sobre la política exterior colombiana han conocido una alentadora evolución cualitativa y cuantitativa. A modo de ejemplo, véanse: González Arana (2004); Buitrago (2006); Galeano David (2012, enero-junio); Borda & Tickner (Eds.) (2011); Camacho Arango (2015).



Al señalar la perspectiva elegida no sobra advertir que la década 1948-1958 también fue crucial para la historia italiana y el retorno de la Península en ese cuadrante latinoamericano que Roma había *perdido* tras la decisión de Mussolini de declarar la guerra a los Estados Unidos en diciembre de 1941. Derrotada y humillada por el Tratado de Paz que los aliados le impusieron, después de la guerra Italia se preocupó por ver cómo recuperar la condición de plena soberanía y paridad en el ámbito internacional (Di Nolfo, 2003; Varsori, 1998). La proclamación de la República (1946) abrió una nueva etapa histórica, el país se ubicó en la esfera de influencia de Washington, las ayudas del Plan Marshall favorecieron la reconstrucción nacional y paulatinamente, si bien bajo la sombra de los condicionamientos estadounidenses, se volvieron a planear estrategias de política exterior, incluso hacia horizontes menos tradicionales como los latinoamericanos².

En este caso, Roma entendió la necesidad de dedicarle a América Latina una atención más escrupulosa. Ricos en recursos y ampliamente representados en la recién nacida Asamblea de las Naciones Unidas, los países ubicados al sur del río Bravo podían considerarse sujetos de relieve para fortalecer la economía italiana y garantizar a la Península mayores apoyos internacionales. Las iniciativas en relación con el área, sin embargo, escatimaron los esfuerzos consiguientes y solo fue posible conseguir unos objetivos inmediatos como la reactivación de las relaciones comerciales y la reanudación de los flujos migratorios. La deferencia a la hegemonía hemisférica de los Estados Unidos y a las reglas interamericanas dadas por Washington frenó por muchos años mayores posibilidades de inserción y colaboración (Incisa di Camerana, 2003, pp.151-161). Las condiciones cambiaron solo en el momento en que la puesta en marcha del proyecto de integración europea rearticuló las dinámicas euroamericanas. Roma asumió la misión de convertirse en un puente entre la Europa de los nuevos compromisos comunitarios, la superpotencia guía de Occidente y la América de los

2. En este sentido, palabras de elogios para la política exterior italiana llegaban incluso de los propios representantes colombianos en Roma. Al señalar el desarrollo progresivo de una estrategia internacional italiana tras el duro Tratado de Paz impuesto por los aliados, en febrero de 1949, por ejemplo, el ministro Alfonso Uribe Misas comunicó a Bogotá: «De un país menospreciado y puesto al margen por el egoísmo y la incompreensión de Inglaterra y de Francia, Italia, apoyada por los Estados Unidos, se ha colocado en primera fila en el escenario de la política mundial. Admirable ejemplo para los pueblos que en un momento dado de su historia pierden la conciencia de su propio valor» (*Informe sobre la Política exterior de Italia*, 14 de febrero de 1949, carpeta 27, caja 594). Mayores apreciaciones llegaron después de la reunión que todos los embajadores italianos acreditados en América Latina llevaron a cabo en Montevideo en 1957. En ese caso se señaló la voluntad italiana de estrechar sus relaciones con las repúblicas latinoamericanas y defender los intereses latinoamericanos en el marco del nuevo Mercado Común Europeo (*Informe político*, 21 de febrero de 1958, carpeta 37, caja 595).



gobiernos desarrollistas. América Latina entró en las prioridades de la política exterior italiana y a los vínculos económicos se les añadieron de manera progresiva otros intereses de naturaleza político-partidista y cultural (La Bella, 2010, pp. 395-413).

Fue justo en este contexto que, después de la guerra, se sentaron las condiciones para la apertura de una nueva etapa también en el marco de las relaciones italo-colombianas; relaciones que, hasta ese entonces, habían originado solo una amistad intermitente, poco impulsada por el escaso número de italianos (poco más de 2.000)³ residentes en el país latinoamericano, pero igualmente puesta a prueba cada vez que acontecimientos colombianos involucraban súbditos originarios de la Península⁴.

En 1947, mientras se ponía en marcha la reactivación de los flujos migratorios desde Italia hacia América, el jefe de la legación italiana en Colombia señaló la necesidad de no considerar al país latinoamericano únicamente «como un lugar de desecho» para la mano de obra italiana sobrante (Cassinis, 1947, c. 8). Dos años después, Roma y Bogotá firmaron un primer tratado de colaboración, seguido, en 1952 y en 1956, por dos acuerdos comerciales. A la vez, en el marco de una más amplia reorganización de sus representaciones en el exterior, Italia y Colombia subieron sus respectivas legaciones a la categoría de Embajada. A raíz de estas iniciativas, los dos países lograron reactivar una política de intercambio y favorecer la inserción de varias familias italianas en el territorio colombiano. Por su lado, los diplomáticos de Bogotá se comprometieron a apoyar los intereses de Roma en los foros internacionales, sobre todo cuando se debatió la admisión de Italia a la ONU. En 1952, como muestra de su cercanía a la nueva Italia democrática, la República de Colombia le otorgó a Alcide De Gasperi la Gran Cruz del Orden Nacional Colombiano (*Informe para el Gabinete de S.E. el Ministro*, 1951-1957, c. 1585).

Los esfuerzos y las iniciativas llevados a cabo a partir de 1945 produjeron una densa documentación diplomática, hoy en día útil para la comprensión y la profundización de los procesos históricos. Con base en esta documentación —aquí comprobada con unos informes del Archivo General de la Nación de Colombia y de la colección *Foreign Relation of the United States*—, el presente trabajo se pregunta por cómo fue percibido el giro histórico colombiano a mediados del siglo xx

3. Sobre la evolución del número de italiano en Colombia cfr. Silva (1999).

4. Solo entre 1880 y la Primera Guerra Mundial las autoridades italianas y colombianas se enfrentaron en más de cincuenta pleitos diplomáticos. La disputa más larga y compleja se dio con la así llamada *cuestión Cerruti*. Al respecto véase Tamburini (2000).



por parte de la diplomacia italiana. Las narraciones detalladas de los representantes de Roma sobre la situación política, económica y social colombiana permiten dar respuestas al interrogante. Sobre todo –y este es el fin último del trabajo–, las fuentes permiten investigar la perspectiva a través de la cual un sujeto europeo interpretó todos los acontecimientos que después de la Segunda Guerra Mundial llevaron a Colombia a la agudización de la confrontación entre democracia y dictadura y al ingreso del país en la Guerra Fría.

1. El comienzo de la Violencia

La legación italiana en Colombia fue una de las primeras que el Gobierno de Roma logró abrir en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial. La misión reanudó sus actividades en agosto de 1945 y por muchos meses, junto con las de Washington y Río de Janeiro, la sede colombiana fue el único punto de observación de la Península en el continente americano.

La reapertura de la legación coincidió con el comienzo de una nueva fase política colombiana y una diferente estructuración de las relaciones sociales. En agosto de 1945, las dimisiones del presidente Alfonso López Pumarejo originaron una inquieta campaña electoral que conduciría al retorno de los conservadores a la guía de la República después de dieciséis años de hegemonía liberal. Al año siguiente, de hecho, el ingeniero antioqueño Mariano Ospina Pérez, exponente del bando moderado del partido conservador, logró prevalecer sobre los candidatos Gabriel Turbay y el disidente radical Jorge Eliécer Gaitán. Los liberales perdían el mando de la máxima magistratura del Estado por sus escisiones; no obstante, mantenían la mayoría en el Congreso, las asambleas departamentales, los consejos municipales y los organismos judiciales. Semejante distribución de fuerza llevó a Mariano Ospina a formar un ejecutivo abierto a la oposición. La coalición, llamada Unión Nacional, contó con la participación equitativa de seis ministros conservadores y seis liberales, pero no fue suficiente para inaugurar una convivencia armónica entre las partes (Abel & Palacios, 2002, pp. 192-198). Por el contrario, la fórmula generó dos consecuencias destinadas a acabar en poco tiempo con el experimento de la colaboración nacional. Por un lado, descontentó a las fracciones extremas de los dos partidos, brindando nuevos argumentos a la dura confrontación bipartidista cuyas raíces provenían del complejo proceso posindependentista. Por otro lado,



radicalizó las fracturas entre los liberales más ortodoxos, en creciente dificultad, y el grupo de Gaitán, en continua expansión.

La renovación del Parlamento, en marzo de 1947, confirmó la fuerza de los gaitanistas y, después de una campaña electoral centrada casi en su totalidad en los problemas que alimentaban el descontento popular, consagró la vocación del grupo a un movimiento de ruptura en el cuadro político colombiano tradicional (Deas, 2015). Frente a este escenario, no sorprendía que la capacidad de movilización popular del gaitanismo fuera lo que más llamara la atención de los diplomáticos italianos. El político no era alguien desconocido para los funcionarios de la Península. Eran notorios, sobre todo, los estudios que el colombiano había llevado a cabo en Roma bajo la dirección de Enrico Ferri a lo largo de los años veinte (Palamara, 2015a, pp. 23-38). Y si bien no hay pruebas de contactos directos entre Gaitán y la misión italiana en Bogotá, por tres años, entre 1945 y 1948, el *gaitanismo* y su guía fueron el filtro a través del cual los funcionarios de la legación interpretaron los cambios de la república latinoamericana.

Según la misión, Gaitán y sus seguidores eran la muestra de un nuevo antagonismo. Lo que venía sellando la historia colombiana no era más la rivalidad tradicional expresada en la lucha liberal-conservadora para el dominio de la nación. Más bien, era una competencia nueva entre un bloque dominante, con la naciente burguesía industrial y los propietarios terratenientes, y las clases populares emergentes. El gaitanismo emergía como la prueba de la rearticulación que la sociedad colombiana había empezado a vivir por efecto de una modernización quizás distorsionada, pero capaz de poner de relieve el protagonismo político de las clases populares. A través de movimientos como los de Gaitán, estas clases empezaban a organizarse y presentarse como términos de una conflictividad diferente.

A comienzos de 1948 el gaitanismo dio una prueba adicional de su capacidad de movilización popular. El 7 de febrero, el líder radical llevó a las calles a más de cien mil ciudadanos con una imponente y sugestiva *marcha del silencio* organizada en respuesta a los actos de violencia con que el gobierno de Mariano Ospina y la policía política perseguían a las oposiciones. De derecha a izquierda, ya eran muchos aquellos que consideraban a Gaitán no solo el líder indiscutible del Partido Liberal, sino también el seguro ganador de las elecciones presidenciales de 1950.

La evolución de los eventos dio a la historia colombiana un rumbo diferente. El 9 de abril, mientras que en Bogotá estaba reunida



la IX Conferencia Interamericana, con la delegación estadounidense decidida a regresar a Washington solo después de la aprobación de una resolución anticomunista, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado. Entre las hipótesis de quienes veían detrás del asesinato la mano del comunismo para sabotear el movimiento panamericano y las teorías de quienes explicaban lo ocurrido por la necesidad de los conservadores de prevenir el retorno de los liberales a la presidencia de Colombia, la muerte de Gaitán condujo al país a una nueva espiral de violencia y a la década de crisis institucional más dura de su historia republicana.

Inmediatamente la noticia del magnicidio hizo estallar la rebelión popular (Alape, 1983). Desde Bogotá, los enfrentamientos se extendieron a las provincias y en las áreas rurales. En las horas dramáticas que siguieron, Mariano Ospina rechazó la hipótesis de las dimisiones y volvió a proponer una vieja idea con la cual solo un ejecutivo con liberales y conservadores equitativamente representados hubiera podido apaciguar al país. Así, mientras que el ejército y las fuerzas gubernamentales reprimían los tumultos, los jefes de los dos partidos tradicionales sacaron a la luz un nuevo gobierno formado por seis conservadores, seis liberales y un militar apolítico.

Como la precedente Unión Nacional, también este nuevo experimento de coalición –una especie de *gentlemen's agreement* (Pécaut, 2012, p. 500)– demostró carecer de la fuerza moral y política para acabar con las tensiones. Después de más de un año de violencias y enfrentamientos institucionales, Mariano Ospina decretó la suspensión de las actividades parlamentarias.

En una Colombia gobernada por medio de la ley marcial y el estado de sitio, las elecciones presidenciales de 1949 sellaron la victoria del ultraconservador Laureano Gómez, capaz de reunir los votos de los moderados, de la extrema derecha, de los católicos y de los trabajadores del sindicato filogubernamental de la Unión de Trabajadores Colombianos (UTC). Laureano Gómez también aprovechó la decisión de los liberales de abstenerse de las consultas por la falta de garantías constitucionales y la política restrictiva adoptada contra la oposición (Henderson, 2006). De todas formas, aunque políticamente hegemónicos y sin oposición, los conservadores habían demostrado su incapacidad de asegurar un clima de orden y pacificación.

En marzo de 1951, en un largo y minucioso informe, el encargado de Negocios italiano en Bogotá subrayó que «la rivalidad entre los dos partidos tradicionales» no podía considerarse más, como hasta la muerte de Gaitán, una sencilla «lucha académica entre dos



oligarquías»; más bien, había alcanzado una «dimensión masiva, extendida a todos los ámbitos» (Télex 271/65, 1951-1957, c. 1573).

Cuando, en noviembre de 1951, por razones de salud, Laureano Gómez le dejó las funciones de Presidente de la República a su ministro del Interior, el más moderado Roberto Urdaneta Arbeláez, volvió a encenderse la esperanza de la normalización política. En realidad fue una enésima ilusión. La violencia contra la oposición y sus órganos de prensa no solo siguió, sino que aumentó su intensidad. En poco tiempo, los liberales se quedaron perdidos y sin guía: sus tres principales líderes, Eduardo Santos, Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Pumarejo, tuvieron que huir al exterior, mientras que el partido mostraba la imposibilidad de representar una fuerza operante (Tirado Mejía, 1989a, pp. 97-99).

La difícil situación interna terminó por perjudicar incluso a los conservadores. Las medidas represivas adoptadas por el Gobierno, la incapacidad de derrotar a los grupos de bandoleros activos en algunos departamentos y la hipótesis de que se modificara la Constitución según criterios diferentes a los históricamente operantes, no solo habían alienado a los conservadores los consensos de una parte de la opinión pública, sino también generaron profundas fracturas en el interior del mismo partido (Ayala Diago, 2013). Más allá de los laureanistas en el poder, en el grupo conservador se enfrentaban por lo menos dos facciones más. La primera, más nutrida y moderada, estaba encabezada por el expresidente Mariano Ospina, quien anhelaba obtener una reelección para el mandato 1954-58; la segunda, en cambio, era liderada por el indómito abogado caldense Gilberto Alzate Avendaño, quien por sus simpatías con el fascismo italiano ya hace tiempo se había ganado el nombre de *Duce Criollo*.

Mientras tanto, el país seguía girando alrededor de una espiral creciente de crueldad y barbarie. Bandas de resistencia armada, integradas principalmente por campesinos, se formaron sobre todo en las áreas donde el Partido Liberal ocupaba la mayoría de los cargos burocráticos. En contra de ellas iba en aumento la respuesta del ejército y de los *chulavitas*, una especie de policía política ligada al Partido Conservador.

El 14 de noviembre de 1952 la Embajada italiana, en Bogotá, comunicaba:

Se puede decir que la oposición liberal está, por lo menos momentáneamente, debilitada y derrotada. El Gobierno ha cedido a la necesidad de llegar a una distensión de los ánimos, no sin antes asegurarse, sin em-



bargo, unas garantías, acentuando, por ejemplo, el rigor de la censura y recolocando al mando de las Fuerzas Armadas al General Rojas Pinilla, elemento seguro y fiel (Télex 2467/800, 1951-1957, c. 1585).

2. Del golpe de opinión a la dictadura

A comienzos de los años cincuenta, de manera similar a otros países latinoamericanos (Rouquié, 1984), también en Colombia los militares estaban listos para ampliar su función profesional e intervenir en el campo de la competencia civil. Si bien no invalidaban, por lo menos por el momento, la tradición civilista que alardeaban (Deas, 2017), las Fuerzas Armadas colombianas representaban, en efecto, una institución en crecimiento tanto a nivel numérico como en las capacidades operativas. Aprovechando el estado de sitio, los militares habían conquistado las alcaldías de más de doscientos municipios. Un factor adicional de refuerzo y prestigio lo estaba procurando, además, la participación de las tropas en el conflicto de Corea (Camacho, 2015, pp. 133-139). Durante la presidencia de Laureano Gómez, de hecho, el de Bogotá había sido el único gobierno latinoamericano en acoger la invitación de Washington y enviar contingentes al tablero asiático. El compromiso, honrado con el envío de una fragata y de un batallón, se había mostrado tácticamente ganador para fortalecer los vínculos militares con los Estados Unidos y adquirir nuevas competencias técnicas, organizativas y políticas⁵. En abril de 1952, la presencia colombiana en Corea había acelerado, incluso, la finalización de un acuerdo de asistencia y cooperación militar entre Bogotá y Washington en el marco del *Mutual Security Act* votado por el Congreso estadounidense el año anterior.

De todas formas, el protagonismo de las Fuerzas Armadas no derivaba solo de la maduración de una tendencia que empujaba a los militares a actuar fuera de su propio ámbito. Con el país al borde del caos fueron los mismos partidos tradicionales y amplios sectores de la opinión pública los que exhortaron a las Fuerzas Armadas a intervenir para restablecer la normalidad institucional. Los grupos conservadores disidentes acariciaban la idea de un gobierno militar porque estaban convencidos de que iban a controlar amplias cuotas de poder. Por otro lado, los liberales consideraban la intervención de las

5. Sobre el significado de la participación colombiana en la guerra de Corea véanse sobre todo: Bushnell (1994); Sáenz (2002); Henderson (2006); Atehortúa Cruz (2008); Camacho Arango (2015); Meléndez Camargo (2015, enero-junio).



Fuerzas Armadas como la única posibilidad para llegar a una tregua y reorganizar la actividad del partido en la espera de nuevas elecciones libres. La población, por su parte, aún veía en el Ejército un símbolo de neutralidad y, como tal, el único medio para apaciguar la nación.

A partir de 1952, incluso la Embajada estadounidense en Colombia había empezado a considerar positivamente una acción militar. Según los representantes de Washington, el desgaste del orden público e institucional aumentaba el riesgo de una infiltración comunista; en su opinión, las Fuerzas Armadas podrían asegurar la estabilidad al país y rechazar semejante amenaza (Atehortúa Cruz, 2010, pp. 33-48).

Si las Fuerzas Armadas eran la institución más aclamada, en su interior el personaje al que todos reconocían era el General Gustavo Rojas Pinilla. Nacido en Tunja en 1900 dentro de una familia católica y conservadora, Gustavo Rojas Pinilla había empezado sus estudios de ingeniería en la Universidad Nacional siendo cadete del Ejército, y contempló luego continuar su formación en los Estados Unidos. De regreso a su patria, él se había dedicado por unos años a la profesión antes de reintegrarse al Ejército en la época del conflicto colombo-peruano (1932-33). Su verdadero ascenso militar y político, sin embargo, había comenzado tras el 9 de abril de 1948. Como comandante de la Tercera Brigada en Cali, Rojas Pinilla se había distinguido por la fuerza con que reprimió los motines que el asesinato de Gaitán había producido también en la provincia. Como reconocimiento por sus servicios, el entonces presidente Ospina Pérez lo nombró ministro de Correos y Telégrafos. Cuando en 1951 el Gobierno reorganizó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, unificando los cuerpos de Tierra, Marina, Aviación y el comando de la Policía, Rojas Pinilla fue nombrado Comandante en Jefe. Ocupando este cargo, fue enviado primero a la Junta Interamericana de Defensa y, de allí, en 1952, al cuartel general de las fuerzas ONU en Corea. Estas designaciones le permitieron no solo aumentar su prestigio frente a sus tropas, sino también establecer los necesarios contactos internacionales, sobre todo con los representantes de Washington (Galvis & Donadio, 2002).

Que Colombia estuviera en la víspera de un giro histórico fue claro incluso para las representaciones extranjeras. La diplomacia italiana no representaba una excepción. En septiembre de 1952, el encargado de Negocios italiano en Bogotá, Bono, señalaba:

El Gobierno [...] empieza hoy a expiar el peligro de una división del partido conservador. Es probable que esta división, que toca al mismo equipo gubernamental, produzca consecuencias radicales, es tan compli-



cado el problema alrededor del cual se debe definir la política a seguir: el problema de las relaciones con el liberalismo. [...] Aunque hasta ahora el Ejército se mostró fiel al Gobierno, él no es de manera alguna un agente sometido a sus directivas y siempre hay la posibilidad latente de que adopte una actitud independiente. [...] El día en que ocurra en el seno del partido conservador una escisión que aislara al Gobierno, en ese día será el Ejército que dirá probablemente la última palabra (Télex 1964/626, 1951-1957, c. 1585).

Todo dejaba predecir que solo se estaba esperando una excusa para acelerar la evolución de los acontecimientos. Fue el propio presidente Laureano Gómez quien dio el pretexto. Agitado por la amenaza que Rojas Pinilla representaba, Gómez le pidió al jefe de Estado, Urdaneta Arbeláez, y a su ministro de Guerra, Lucio Pabón Núñez, que destituyeran al General. La justificación de la dimisión se habría hallado en unas supuestas torturas practicadas a un empresario cercano a los laureanistas. Al negarse a cumplir la solicitud, Laureano Gómez volvió a asumir la presidencia de la República y nombró arbitrariamente a dos de sus partidarios al mando de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Guerra. Esa ruptura allanó el camino al golpe. El 13 de junio de 1953, sin encontrar una verdadera oposición, Rojas Pinilla llegó al palacio presidencial y, tras haber ofrecido en vano la dirección del país a Urdaneta Arbeláez, asumió la jefatura del Gobierno.

Como se había pronosticado en los meses precedentes, Rojas Pinilla obtuvo de inmediato el respaldo de una vasta y diversa representación política que incluía desde algunos laureanistas disidentes, listos para subir al auto de los ganadores, hasta los liberales, pasando por los ospinistas y los alzatistas. En la oposición se quedaba Laureano Gómez –aislado y obligado al exilio una semana tras el golpe– y el pequeño partido comunista.

A los consensos políticos se sumaron los de la sociedad civil y de la Iglesia. La población saludó el golpe como el fin de la horrible noche de la República (Tirado Mejía, 1989b, p. 108); los grupos económicos esperaron que el gobierno de los militares restableciera el orden público para aprovechar mejor la coyuntura del momento, sobre todo gracias a los elevados precios del café, su principal producto de exportación. Finalmente, por boca del arzobispo de Bogotá, Crisanto Luque, la Iglesia dijo que la autoridad de Rojas Pinilla debía ser reconocida y respetada (Tirado Mejía, 1989b, p. 117).

Las modalidades pacíficas que habían llevado a los militares al poder y el amplio abanico de consentimientos contribuyeron a presentar



el golpe de Estado como un *golpe de opinión*. Construido sobre bases sólidas, el nuevo gobierno no tuvo dificultad para obtener incluso la complacencia de la Asamblea Nacional Constituyente. El organismo se reunió dos días después del golpe. Pero, en lugar de discutir el proyecto de una nueva Constitución, como era el programa el 18 de junio, generó un acto legislativo que legitimaba a Rojas Pinilla como Presidente de Colombia hasta el 7 de agosto de 1954.

El día en que la Asamblea Nacional Constituyente empezó sus trabajos, Washington calificó el golpe de Estado de Rojas Pinilla como una acción que podía «significar el retorno de Colombia a la democracia» (Atehortúa Cruz, 2010, p. 39). Enseguida la Casa Blanca procedió a reconocer el gobierno del General, lo cual fue seguido de inmediato por otros países occidentales. Dentro de estos estuvo también Italia. Quince días después del golpe, el representante de Roma en Bogotá, Umberto Natali, resumía así la situación:

Continúan en todo el país las manifestaciones populares de gratitud y de aplauso para el Presidente. Sin embargo la situación política aparece precaria y llena de interrogantes. Los liberales, a pesar de sus declaraciones de apoyo al nuevo régimen, se quedan en una posición de espera. [Los conservadores] aparecen divididos en varios grupos [...]. Los dos principales exponentes, el expresidente Ospina Pérez y Alzate Avendaño, el verdadero iniciador de la disidencia, [están] ambos deseosos de afirmar su autoridad y satisfacer sus ambiciones. [...] Ospina Pérez y Alzate Avendaño piensan sin lugar a duda suceder a la presidencia apenas sea aprobada la Constitución. Yo pienso, en cambio, que ellos se hacen grandes ilusiones al respecto. El General Rojas Pinilla, quien tiene el mando efectivo de las fuerzas armadas del país, que son a él fieles, y que goza del general consentimiento de la población, no dejará pronto la Presidencia de la República (Télex 2037/544, 1951-1957, c. 1597).

Según el funcionario italiano, el deslizamiento de Colombia hacia una dictadura militar parecía probable. Sin embargo, por las incertidumbres y los interrogantes que rodeaban al país era difícil arriesgar una previsión cierta.

Para amplios sectores de la opinión pública colombiana, Rojas Pinilla era un hombre de la *causa conservadora* (Ayala Diago, 1990-1991). Su rápido ascenso militar, ocurrido en simultáneo con la nueva radicalización de la lucha política bipartidista, había contribuido a conferirle a su imagen un aura casi mesiánica. Gran parte de la prensa nacional lo mostraba como el único capaz de promover la recons-



trucción de las filas conservadoras, acabando con la violencia y las ilegalidades contra los liberales. Sin embargo, quienes habían mirado a Rojas Pinilla en estos términos, después del golpe tuvieron dificultad para comprender si sus convicciones estaban fundadas o no.

Por un lado fue evidente que el gobierno del General no se podía considerar como uno de las Fuerzas Armadas. A los militares se reservaron solo tres Ministerios. Los demás se ofrecieron a hombres reconocidos como *ospinistas* o adscritos al Partido Conservador. Entre ellos sobresalía, sobre todo, el nombre de Lucio Pabón Núñez en el Ministerio del Interior. Este –como lo señaló el embajador Natali–, «tras haber sido, por su ímpetu e intransigencia, una de las figuras más visibles del pasado gobierno, encontró a última hora la manera de desengancharse y volver a aparecer en el nuevo gabinete en una posición muy importante» (Télex 2303/594, 1951-1957, c. 1597). Al respecto –siempre según el representante de Roma–, no asombraba si era justo contra Pabón Núñez que se lanzaran los principales «rayos de los políticos y de la opinión pública», ni si los alzatistas, decepcionados por la composición ministerial, decidieron no participar. No menor fue el desencanto de los liberales, que en el nuevo gabinete vieron la persistencia de viejas prácticas excluyentes.

Por otro lado, también fue claro que la conspicua participación de funcionarios civiles en el nuevo gobierno no obstaculizaría el ascenso de las Fuerzas Armadas. Los militares, de hecho, ocuparon la mayoría de las gobernaciones departamentales y, entre estas, las neurálgicas para el restablecimiento del orden nacional y las fundamentales desde el punto de vista estratégico.

Poco más de un mes después del golpe, la Embajada italiana en Bogotá comunicó que:

En el ámbito de los partidos se nota una progresiva disminución de la autoridad y del prestigio de lo conservador. [...]. Las decepciones que los exponentes conservadores se habían llevado el pasado junio con la destitución violenta del Presidente Laureano Gómez y con la asunción al poder por parte del General Rojas Pinilla, ya deben considerarse terminadas. El poder ya se encuentra buena parte en las manos de los militares, que sustituyen, incluso en las provincias, a los funcionarios civiles (Télex 1951-1957, c. 1597).

Estas palabras comprobaban cómo en poco tiempo el régimen de Rojas Pinilla había logrado convertirse de una «especie castrense de gobierno conservador» (Restrepo Pietrahíta, 1976) a un régimen con



rasgos autoritarios. Las etapas que generaron la transformación se dieron de manera paulatina, mientras que la acción fue ejecutada en varios niveles. El esfuerzo mayor y más evidente, según lo señalado por las delegaciones extranjeras, fue el fortalecimiento de los militares como principal fuente de respaldo organizado para el régimen. En los años de Rojas Pinilla, las Fuerzas Armadas llegaron a contar con un total de 32.000 hombres respecto a los 14.000 de 1948 (Tirado Mejía, 1989b, p. 111). Los gastos militares para la compra de armamentos y dotaciones crecieron vertiginosamente, aumentando en 77 % solo en 1953, hasta representar la tercera parte de los gastos del Estado. Al final de 1954 fue el mismo representante de Washington en Bogotá quien denunció que los gastos de Rojas Pinilla para las Fuerzas Armadas habían aumentado con notoriedad, hasta representar un riesgo para la estabilidad de la economía colombiana (*Foreign Relations of the United States, 1952-1954*, pp. 812-816). Al respecto, señaló el diplomático que sería oportuno que los Estados Unidos evaluaran concretamente la posibilidad de continuar acogiendo las peticiones colombianas de asistencia militar.

Al fortalecimiento militar lo acompañó el político e institucional. Rojas Pinilla demostró que no quería darle a su gobierno un mero carácter de transitoriedad. El Acto con que la Asamblea Nacional Constituyente legalizó el golpe puso al General en la condición de quedarse al mando del país hasta cuando su gobierno no hubiera juzgado que existían «las condiciones adecuadas para garantizar la libertad y la pureza del sufragio» (Tirado Mejía, 1989b, p. 109). Sin embargo, al negarse a levantar el estado de excepción, Rojas Pinilla tuvo el pretexto para rechazar el posible retorno a la normalidad institucional. Además, en 1954, a través de un adecuado aumento de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, el General se aseguró un mayor control del organismo. Gozando de esta mayoría, la Asamblea –que no era expresión del voto popular– decretó la reelección de Rojas Pinilla hasta el 7 de agosto de 1958. Aprovechando la inactividad del Congreso, cerrado desde 1949, el régimen utilizó la Asamblea Nacional Constituyente para decretar la abolición de las asambleas populares y su sustitución por consejos administrativos nombrados directamente por Rojas Pinilla.

Al mismo tiempo, inspirándose en el sistema peronista, el régimen amplió el control sobre el sistema social y sindical con el objetivo de manejar y solucionar desde arriba los antagonismos entre capital y trabajo. En 1954, bajo la atenta mirada de la hija del general, María Eugenia Rojas, se fundó la Secretaría Nacional de Asistencia Social (SENDAS).



El año anterior, con el apoyo del gobierno militar ya se había organizado la Confederación Nacional del Trabajo, progresivamente soportada moral y financieramente por la institución peronista Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalizados (ATLAS).

Las mayores energías para tratar de asegurar una base política autónoma favorable al Gobierno se prodigaron en 1955. Al comienzo del año, el ministro Pabón Núñez anunció la formación del Movimiento de Acción Nacional (MAN) con el objetivo de «apoyar la obra de gobierno en nombre de todos los partidos y clases» (Ayala Diago, 1992, p. 46). Con el pretexto de lograr la reconciliación y la pacificación nacional, el régimen expresaba así su voluntad de llegar a un realineamiento de sus apoyos políticos más allá de las dos grandes colectividades partidistas del país. En el MAN, presentado como un *tercer partido*, confluyeron, de hecho, liberales, conservadores, socialistas y viejos gaitanistas. Su formación pareció confirmar lo que el embajador Natali había comunicado al Gobierno de Roma después del golpe:

Si queremos ampliar la mirada hacia el futuro cercano –había señalado el diplomático el 18 de julio de 1953–, no es arriesgado predecir que Rojas Pinilla tratará de crear y de apoyarse en un movimiento de unidad nacional, con un contenido social que siempre los viejos partidos desecharon. Él podría retomar, bajo otras formas, ese movimiento de rescate popular que el líder liberal Gaitán había llevado a un buen punto cuando fue asesinado el 9 de abril de 1948, y que se enmarcaría muy bien en el momento histórico y en la realidad sociológica de la América del Sur, acercando la Colombia a la Argentina de Perón y a la Bolivia de Paz Estenssoro (Télex 2303/594, ADMAE, SAP, 1951-1957, *Colombia*, c. 1597).

De todas formas, como el mismo embajador había podido predecir⁶, el MAN no tuvo una vida larga. Refutado por los líderes conservadores y liberales, el movimiento apareció y desapareció en solo dos meses. El mismo Rojas Pinilla tuvo que renunciar, por lo menos por el momento, a la posibilidad de alejarse de los grupos que lo habían llevado al poder. Lo que no desapareció fue la idea de llegar a la composición de una *tercera fuerza* –de hecho anunciada nuevamente en 1956, como movimiento de apoyo político a la dictadura–, a través

6. «Claro está –había escrito en esa ocasión el diplomático– que un semejante programa de acción encontraría por evidentes razones una fuerte resistencia por parte de los viejos dirigentes de los dos partidos» (Télex 2303/594, c1597).



de la cooptación de las bases de los partidos tradicionales y la polarización de los sectores populares aún extraños a la clientela política.

No menos determinada fue la acción sobre la propaganda. A través de la Oficina de Información y Propaganda del Estado (ODIPE), el régimen alimentó una constante campaña de difusión de la imagen del gobierno militar y de la figura de Rojas Pinilla en todos los medios: la radio, la prensa y la televisión, que apareció en Colombia el 13 de junio de 1954. El mismo 13 de junio, fecha del aniversario del golpe, fue proclamado día de la Fiesta Cívica Nacional.

Al activismo de la máquina propagandística lo acompañó un paulatino endurecimiento de la censura. El aliento que las Fuerzas Armadas habían asegurado en un primer momento a la prensa terminó en marzo de 1954. Al año siguiente la garra de la censura llegó a su auge. El régimen prohibió la circulación de las publicaciones internacionales y suspendió la de los dos principales periódicos colombianos, *El Espectador* y *El Tiempo*. La severidad de las medidas fue tal que provocó la atención de la *Inter American Press Association* y muchos quedaron convencidos, incluso Washington, de las «tendencias dictatoriales de corte militarista» del gobierno de Rojas Pinilla (Télex 8/4251, 1951-1957, c. 1623).

3. El gobierno de Rojas Pinilla

Al llegar a la dirección del país por la crisis de los partidos tradicionales, los militares habían conquistado el poder sin un verdadero proyecto político. Sin embargo, una vez instalado y confirmado en la Presidencia de la República, Rojas Pinilla diseñó un programa de acción gubernativa fundado en una estrecha conexión entre política interna e internacional (Atehortúa Cruz, 2010, p. 39).

A nivel interno, los esfuerzos de los militares se encaminaron principalmente a contener y solucionar el problema de la violencia. A través de una amnistía para los detenidos políticos y los *guerrilleros*, el Gobierno logró restablecer el orden en algunos departamentos. Diferentes grupos de sublevados abandonaron las hostilidades y entregaron las armas. Desde Venezuela y Panamá –como no dejó de señalarlo la Embajada italiana–, regresaron «miles de colombianos que la lucha fratricida había obligado a pasar la frontera en búsqueda de protección» (Télex 3278/811, 1950-1957, c. 1597). Semejantes ejemplos fueron suficientes en los primeros meses después del golpe para convertir a Rojas Pinilla en el *presidente de la paz*.



Ya desde el final de 1953, en realidad, Colombia volvió a vivir una nueva espiral de violencia. Las áreas en que actuaba la guerrilla fueron declaradas zonas de operación militar. Para el Gobierno fue fácil imputar el recrudecimiento del conflicto interno a la acción de las fuerzas del comunismo internacional. Por ende, el partido comunista colombiano fue declarado fuera de la ley, sus miembros perseguidos y, sobre todo, se encontró así un ulterior pretexto para poder aumentar la militarización del territorio (Trejos Rosero, 2011).

Con la aspiración de integrar las diferentes áreas y grupos sociales de la nación, el régimen puso en marcha también un ambicioso programa de transformación y modernización. De manera simultánea a la construcción de numerosas obras de infraestructura –al comienzo favorecidas por una situación de prosperidad económica–, el Gobierno concentró sus intereses, sobre todo, en los problemas agrarios. Las medidas –que no habrían perjudicado a la gran propiedad latifundista– en principio se encaminaron a favorecer la colonización y la inmigración hacia las zonas vírgenes del territorio colombiano. La Embajada italiana consideró que, para realizar sus proyectos, el Gobierno de Rojas Pinilla iba a necesitar de «algunos años y amplios medios económicos». Los puntos principales del programa según el representante de Roma eran:

1.º colonización del territorio; 2.º instauración de un sistema corporativo en las colonias agrícolas; 3.º inmigración de técnicos y campesinos europeos para la utilización de las tierras; 4.º aumento de los trabajos de utilidad pública; 5.º continuación de los trabajos del ferrocarril del Magdalena; 6.º incremento de la construcción de viviendas rurales; 7.º amplia reforma tributaria (Télex 2303/594, 1951-1957, c. 1597).

Sobre los esfuerzos para la realización de un programa encaminado a la pacificación social y la modernización del país pesaron, sin embargo, restricciones de diferente naturaleza⁷. En primer lugar, lo que inspiró la gestión de las Fuerzas Armadas fueron algunos principios generales en los cuales Rojas Pinilla creía que estaba fundado el bien común, «en el marco de una concepción autoritaria y marcadamente conservadora» (Tirado Mejía, 1989b, p. 120). Por otra parte, y en

7. No sobra advertir que el régimen resultó funcional a los intereses italianos. En los años de Rojas Pinilla Roma mantuvo un superávit constante en el comercio bilateral con Colombia. Import/export 1952: 3.683.255/958.490; 1953: 4.910.570/2.761.002; 1954: 7.242.748/3.736.040; 1955: 6.818.186/3.773.968; 1956: 6.865.938/6.317.051 (datos en millones de liras) (*Appunto*, 1957-1961, c. 47).



segundo lugar, influyó el paulatino deterioro de la situación económica y la incapacidad del Gobierno de enfrentar problemas como la creciente inflación interna, la deuda pública, la reducción de la moneda externa, el alza del dólar y la fuga de capitales. Todo eso frenó la misma acción gubernativa. Tras un año del golpe, la misión italiana precisaba que, «más que de recuento del trabajo realizado», era oportuno hablar de «un balance de previsión de las intenciones» (Télex 1679/367, 1951-1957, c. 1611).

En relación con la política exterior, la conquista del poder por parte de las Fuerzas Armadas no generó cambios en las directrices que, ya después de la Segunda Guerra Mundial, habían hecho de Colombia uno de los países latinoamericanos más fieles a las posiciones de Washington. Vinculando su acción a la doctrina del *res pice polum*, Colombia reconoció y aceptó casi sin reserva la hegemonía del potente vecino septentrional. El apoyo incondicional de Bogotá a la idea de un panamericanismo que, en el ámbito de la contraposición bipolar, blindara al hemisferio de la amenaza del comunismo representó, así, para Rojas Pinilla, un pilar de su política exterior. Este fue incluso un sólido gancho para unir decisiones internas. Los argumentos que en marzo de 1954, durante la X Conferencia Interamericana, llevaron a la delegación de Rojas Pinilla a apoyar la resolución anticomunista propuesta por los Estados Unidos, de hecho, fueron los mismos utilizados unos meses después por el General para poner fuera de la ley al partido comunista colombiano.

La cruzada anticomunista, la renovada fidelidad a los Estados Unidos y la necesidad del régimen de buscar en una política exterior más enérgica un ulterior factor de consentimiento estimularon al gobierno de los militares a reivindicar, incluso, un mayor papel en el ámbito regional e internacional. Acabando con la tradición de un dinamismo contenido, ya tras la Segunda Guerra Mundial la diplomacia colombiana había desempeñado un rol más incisivo en la creación de los organismos dirigidos a la consecución de la paz mundial y de la defensa del continente americano. En 1946 el compromiso le había permitido al país ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente, y de guiar, dos años después, con el nombramiento de primer secretario de Alberto Lleras Camargo, la Organización de los Estados Americanos. Rojas Pinilla confirmó las responsabilidades contraídas en nombre de la solidaridad hemisférica, pero quiso ir más allá, tratando de postular su régimen como promotor e inspirador de una política anticomunista en la región Caribe. Así las cosas, Bogotá intensificó sus actividades en las Antillas y



en Centroamérica con países –como ya en 1952 lo había señalado el encargado de Negocios italiano– con los que unos años antes no tenía sino «platónicas relaciones diplomáticas» (Télex 1868/597, 1951-1957, c. 1585). En este sentido, se fortalecieron los vínculos con la dictadura dominicana de Trujillo y la nicaragüense de los Somoza; finalmente, en vista de la necesidad de estar listos para contrarrestar los movimientos de izquierda activos en el cuadrante caribeño, se encontró un enésimo pretexto para justificar el creciente rearme.

De manera simultánea, Rojas Pinilla trató de asegurar para Colombia la paternidad de un nuevo bloque bolivariano en el ámbito interamericano. Esta intención habría tenido que concretarse a partir de un encuentro, organizado por el mismo General, entre los representantes de Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá y Colombia el 17 de diciembre de 1953, con ocasión del 123° aniversario de la muerte de Simón Bolívar. Pero la evidente aspiración de «procurar a Colombia una posición prominente dentro de las naciones bolivarianas –escribió en esa ocasión el embajador Natali– [...] hizo fracasar la iniciativa» (Télex 3690/c, 1951-1957, c. 1597). Con la excepción del Ecuador de José María Velasco, todos los otros presidentes rechazaron la invitación, al señalar que la política de rearme y el mayor activismo de Bogotá en el campo diplomático constituían una amenaza para la estabilidad y el equilibrio de la región.

Consciente de estas preocupaciones, el régimen de Rojas Pinilla no dejó de promover una política de amistad con los países vecinos. Los mayores esfuerzos concernieron a Perú y Venezuela. Las aproximaciones con el primero no eliminaron los temores de Lima sobre una posible alianza colombo-ecuatoriana, pero fueron suficientes para senar las relaciones bilaterales, ya que favorecieron la solución de un largo y complejo asunto relativo al líder peruano Víctor Raúl Haya de la Torre⁸. En relación con la segunda, los motivos de tensión entre Bogotá y Caracas eran varios: delimitación de la frontera, traspaso ilegal de la frontera por contrabandistas y grupos armados y, por último, la aspiración mutua de asumir el liderazgo de la América Bolivariana. La posibilidad de reducir las razones de rivalidad fue hallada en el carácter *camaraderil* que los dos países en ese entonces compartían. La «solidaridad de régimen»⁹ apareció, de hecho, como la llave para solucionar

8. Perseguido por el gobierno del general Odría, el fundador de la APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) vivía, de hecho, desde 1949 en la Embajada colombiana en Perú como exiliado político. En 1954 un acuerdo entre ambos gobiernos le permitió a Haya de la Torre viajar a México con un salvoconducto sin temer por su incolumidad. Para una reflexión sobre el asunto desde la posición de la diplomacia colombiana (Cavelier, 1997).

9. Así lo llamó el 12 de abril de 1957 el embajador Assettati (Télex 1426/252, 1957-1961, b. 18).



contrastes y envidias. Sin embargo, los esfuerzos fueron perjudicados por la retórica, como lo demostró, entre otras cosas, el pomposo pero infecundo encuentro, en febrero de 1957, entre los jefes de ambos países en la frontera colombo-venezolana sobre el puente Simón Bolívar.

Otro pilar de la acción internacional colombiana que el régimen trató de fortalecer fue el vínculo con el Vaticano. También en este caso se confirmaba la estrecha conexión entre la política interna y la externa. Durante los años de la dictadura, de hecho, el Gobierno apeló repetidamente a *los ideales de Cristo* y a los valores de un Estado promovido como defensor de la cristiandad. De tal manera se quería fortalecer el proyecto de los militares y justificar la necesidad de la regeneración ética del país; este último objetivo se quería lograr no solo a través de la derrota del comunismo como enemigo interno y externo, sino también a través de la tradicional aspiración de la diplomacia colombiana de convertir al país en una «potencia moral»¹⁰.

4. La caída de Rojas Pinilla y los exordios del Frente Nacional

Invocadas como guardianes de los procesos constitucionales, las Fuerzas Armadas colombianas habían terminado por imponer al país un duro régimen. El antiparlamentarismo, la búsqueda de un contacto directo con el pueblo, el carácter de una dictadura abierta a los civiles, sus intenciones de erigirse como árbitro en los conflictos y la limitación de las libertades, fueron las principales características del gobierno de Rojas Pinilla. El giro autoritario dado por el General, sin embargo, ocasionó la separación entre el régimen y las fuerzas que en un primer momento lo habían apoyado.

Cuando, en agosto de 1954, la Asamblea Nacional Constituyente confirmó a Rojas Pinilla a la Presidencia también para el siguiente cuatrienio, los dirigentes liberales y conservadores tomaron definitivamente conciencia de que las Fuerzas Armadas no tenían la intención de dejar otra vez el campo a la confrontación bipartidista. Sin el entusiasmo manifestado al momento del golpe, los partidos aceptaron el nuevo estado de cosas, persuadidos, una vez más –como lo señaló la Embajada italiana–, de que «el gobierno militar no [fuera] fin a sí mismo, sino medio para restablecer el equilibrio político y jurídico» (*Situazione politica*, 1951-1957, c. 1611).

10. Sobre el tema, cfr. La política internacional de Colombia 1951-52 (1952), suplemento *Noticias de Colombia*, 96, Ministerio de Relaciones Exteriores, República de Colombia, p. 5.



Después de un año la situación cambió radicalmente. El 14 de octubre de 1955 la representación italiana anunció que los liberales habían perdido «esas ilusiones [...] [de] que la formación del régimen militar permitiera la constitución de las condiciones necesarias para que ellos pudieran desarrollar libremente su campaña política» (Télex 16/12589/c, 1951-1957, c. 1623). La decepción de los liberales había ocurrido con la negativa del Gobierno de incluirlos en los cargos burocráticos y políticos en condiciones y números iguales a los de los conservadores y, sobre todo, con la censura que había llevado a la clausura de *El Tiempo*. En el partido conservador, en cambio, iba en aumento el número de los que pasaban a la oposición. Como sostén del régimen quedaban solo «magras clientelas agrupadas alrededor de aquellos que, por tener posiciones de gobierno, tienen la intención de defenderlas» (Télex 16/12589/c, 1951-1957, c. 1623).

Como expresión de esta nueva situación –decía la Embajada – estaba la maniobra empezada por un grupo de liberales [...] de constituir una Unión Nacional que reuniera todos los opositores del Gobierno, fueran ellos liberales o conservadores, en un frente democrático, con el objetivo declarado de aislar al Gobierno en el país (Télex n. 16/12589/c, 1951-1957, c. 1623).

Sea como fuere, habría sido necesario esperar otro año para que la idea de un frente civil pudiera dar sus primeros resultados. Si bien se encontraban decepcionados con el régimen, una franja de los conservadores no quería llegar a la ruptura total, ya que el partido aún controlaba gran parte de la burocracia y persistía en la idea de poder suceder en la Presidencia en 1958. Así las cosas, los liberales no tuvieron otra opción sino mirar hacia los viejos enemigos laureanistas. Con este objetivo, en julio de 1956, Alberto Lleras Camargo voló a España para encontrarse con Laureano Gómez. La reunión produjo el Pacto de Benidorm, con el que liberales y conservadores definían una acción conjunta para restablecer libertades y garantías constitucionales.

La iniciativa demostró poder darle un giro a la historia colombiana. El embajador italiano en Bogotá, Assettati, escribió que el Gobierno ya se encontraba «aislado», pues había «logrado con sus errores crear un vacío alrededor de sí mismo» (Télex 5632/672, 1951-1957, c. 1636). El vacío del que hablaba Assettati al final de 1956 era real. En esa fecha, en efecto, habían dado la espalda al régimen casi todas las fuerzas del país.

El primero en retirar su apoyo había sido el poder judicial. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia habían entregado sus



renuncias ya en noviembre de 1953, como respuesta a la excesiva injerencia del ejecutivo. A eso se le sumaba la paulatina ruptura entre régimen y opinión pública. La grieta se abrió en la vigilia del primer aniversario del golpe. El 8 de junio de 1954, en Bogotá, un batallón del Ejército le disparó a una marcha de estudiantes. Los ocho muertos y los más de cuarenta heridos alienaron a los movimientos estudiantiles de las Fuerzas Armadas y le hicieron entender a la sociedad civil de qué manera el régimen reprimía el disenso. En los años siguientes la fractura siguió aumentando también por la influencia que los partidos tradicionales mantenían sobre las masas. Fue sobre todo gracias a este antecedente que la justificación moral del golpe, al comienzo asegurada por el amplio apoyo de la opinión pública, comenzó a enturbiarse cada vez más. La quiebra definitiva se dio en agosto de 1956, cuando la explosión de unos camiones del Ejército cargados de dinamita destruyó unos barrios en la ciudad de Cali y produjo más de 1.300 muertos y miles de heridos. El intento de Rojas Pinilla de hacer recaer sobre los vértices del Partido Liberal y Conservador la responsabilidad de la catástrofe –ocurrida por la negligencia de las Fuerzas Armadas– empañó irremparablemente la imagen del General.

Progresivo, pero igualmente turbulento, fue el divorcio del régimen con la Iglesia y los principales grupos económicos. En línea con los demás sectores del país, estos últimos habían saludado con entusiasmo la llegada de los militares al poder. En el retorno a la legalidad ellos veían la condición necesaria para una ampliación de sus horizontes económicos. La política adoptada por Rojas Pinilla, simultáneamente al final de la coyuntura favorable después de la Segunda Guerra Mundial, cambió la situación. Al descontento por la puesta en marcha de las nuevas medidas fiscales, se sumó pronto la desazón por la adopción de disposiciones encaminadas a contener la deuda pública. El Gobierno no tardó en ser acusado de excesivo intervencionismo. Pero, cuando al final de 1956, el régimen aumentó el número de artículos de importación prohibida, con el riesgo de paralizar la industria nacional, la ruptura fue total (Sáenz, 2002, pp. 191-206).

En cuanto a la Iglesia, ella nunca digirió el nacimiento y las actividades de la Confederación Nacional de Trabajadores deseada por Rojas Pinilla. El grupo le quitaba espacios al sindicalismo católico de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC). Para contrarrestarlo, la Iglesia no dejó de hacer hincapié en la inspiración peronista de la asociación, juzgándola por eso anticonfesional. En febrero de 1956, después de una nueva y dura represión de la disidencia, el órgano oficial de la jerarquía católica tildó la actitud de los militares como



anticristiana. Tales críticas dieron más peso a las oposiciones, proporcionándoles nuevos apoyos y respaldos.

La pérdida de consensos internos no fue la única que la dictadura de Rojas Pinilla tuvo que enfrentar. A esta hizo eco aquella sufrida en el ámbito panamericano. La imagen del General ya había venido deteriorándose desde 1955, cuando la Inter American Press Association acusó al régimen de violar la libertad de prensa y opinión. En esa ocasión, el organismo había invitado a los Estados Unidos a tomar conciencia de lo que ocurría en Colombia. Un golpe aún más duro lo recibió Rojas Pinilla cuando, en julio de 1956, el *Times* publicó un artículo en el que se le imputaba al General haber utilizado su cargo para realizar negocios ilícitos y, por ende, acumulado ingentes riquezas (Sáenz, 2002, pp. 195-196). El embajador colombiano en Washington protestó duramente, aunque con escasos resultados. Más aún porque en esa fecha los Estados Unidos ya miraban al General sin la aprobación con la que habían seguido su ascenso.

Entre otras cosas, al Gobierno de Washington no se le había escapado la apertura colombiana a los países detrás de la Cortina de Hierro. Al comienzo de 1956, de hecho, la difícil situación económica y financiera había inducido a Colombia a buscar nuevos mercados para la venta de café y con sus réditos hacer frente a las compras de bienes de capital y consumo. Esa necesidad había llevado a un primer encuentro, si bien de naturaleza comercial, con Alemania Oriental, Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Estos países se habían apresurado a organizar una visita oficial en Bogotá y existía el riesgo –como documentó incluso la Embajada italiana– de que «cualquier forma de acercamiento de Colombia al mundo comunista [ofreciera] un terreno fértil para el desarrollo de esos gérmenes que los agentes económicos comunistas se adelantarían a difundir dentro de las infelices clases populares [colombianas]» (Télex 41/11405, 1951-1957, c. 1636).

A raíz de estos sucesos, en abril de 1956 el Departamento de Estado redactó un informe en el cual se reflexionaba sobre la evolución política colombiana y las consecuencias que esta podía generar en el ámbito panamericano (*FRUS*, 1955-1957, VII, pp. 900-915). Según Washington, el gobierno militar duraría hasta el final del año, pero difícilmente hasta al término del mandato. El régimen podía contar únicamente con la fidelidad de las Fuerzas Armadas. Rojas Pinilla –escribían los norteamericanos– se había demostrado incapaz de ampliar su base política y restablecer la normalidad constitucional. Colombia había sido empujada hacia un *deadlock*, también porque la situación se veía otra vez perjudicada por el retorno de la guerrilla,



con grupos armados que se movilizaban sobre todo en las áreas montañosas y en los principales valles fluviales de la nación.

Después de unos meses también el embajador Assettati comunicó que Colombia se encontraba en un punto muerto y que, tras el Pacto de Benidorm, era difícil imaginar si la coyuntura se iba a convertir «en una crisis de régimen o si, en cambio, todo se iba a solucionar en una acentuación del carácter dictatorial» (Télex 3632/672, 1951-1957, c. 1636).

En un primer momento pareció prevalecer esta segunda hipótesis. En agosto de 1956, el propio Assettati señalaba la difusión de rumores sobre la constitución de una Junta Militar. En realidad, después de un mes, Rojas Pinilla trató de solucionar la crisis con un nuevo gabinete. La misión italiana comunicó, entonces, que el «cambio de rumbo» intentado por los militares tenía dos interpretaciones. Por un lado, que las FF. AA. reaccionaban a la crisis «con la creación de un ministerio sin calificación política [...] para pedir con probabilidades de éxito el apoyo de todos colombianos en buena fe» (Télex 3766/695, 1951-1957, c. 1636). Por otro lado, que:

En lugar de un cambio sustancial, [se trataba] de una estratagema táctica para superar más sencillamente las dificultades del momento. Sólo en unos pocos meses será posible decir si se trata de intenciones reales de tregua en la preparación de un retorno a la normalidad constitucional o de una astuta manera de tomar tiempo para enmascarar la intención de quedarse permanentemente en el poder (Télex 3766/695, 1951-1957, c. 1636).

En enero de 1957, el ministro de la Guerra, Gabriel París, anunció la permanencia en el poder de Rojas Pinilla para el cuatrienio 1958-1962. Esta vez la maniobra terminó empujando a la oposición a esos sectores que aún mantenían una actitud de espera. En contra de la dictadura tomaron posición los ospinistas, que veían desvanecer la hipótesis de suceder al General, y la Iglesia, que a través del cardenal Luque, juzgó como ilegal una eventual reelección de Rojas Pinilla. Por fin unida, el 20 de marzo la oposición firmó un nuevo acuerdo que podía considerarse como la continuación del precedente Pacto de Benidorm. El acuerdo comprometía a liberales y conservadores a crear un gobierno civil con el que regir el país en nombre de los dos partidos igualmente representados. Rojas Pinilla trató de reaccionar. Por un lado empujó a la Asamblea Nacional Constituyente, una vez más modificada en su composición numérica, a legitimar su reelección para el período 1958-62. Por el otro, ordenó el encarcelamiento de Guillermo León Valencia, el abogado que la oposición había elegido



como candidato para la Presidencia de la República. El desgarramiento aceleró los eventos. Los vértices de los dos partidos, los movimientos estudiantiles y la Iglesia reclamaron la dimisión del Gobierno, mientras que la federación de comerciantes y los gremios industriales paralizaban al país con una huelga general. Aislado, Rojas Pinilla no pudo hacer otra cosa que dejar el cargo en manos de una Junta Militar, de inmediato llamada a formar un gabinete paritario, a liquidar a la Asamblea Nacional Constituyente y celebrar nuevas elecciones libres.

El 20 de julio Alberto Lleras Camargo voló de nuevo a España donde Laureano Gómez. En Sitges, cerca de Barcelona, los dos líderes se acordaron de la necesidad de constitucionalizar, por medio de un plebiscito, el modelo de alternancia bipartidista prefigurado por el Pacto de Benidorm, con el propósito de asegurar una tregua política de doce años (Silva Luján, 1989, pp. 179-210). El compromiso tuvo el mérito de empezar a traducir en fórmulas concretas la alianza entre liberales y conservadores, aunque internamente los partidos seguían mostrando divisiones evidentes. La *Junta*, obstaculizada en su obra conciliadora por las conspiraciones de unos expartidarios de las Fuerzas Armadas aún fieles a Rojas Pinilla, aceptó el Pacto de Sitges y convocó al electorado a una histórica reforma constitucional. El 1 de diciembre de 1957, los colombianos –incluso por primera vez las mujeres– aprobaron las bases de los futuros gobiernos de coalición. Entre otras, se aceptó la responsabilidad compartida de los partidos tradicionales en el ejercicio del poder, la alternancia entre liberales y conservadores al mando presidencial y la paridad en la gestión administrativa del Estado.

El esquema institucional avalado por la reforma permitió el retorno a la normalidad constitucional. El 16 de marzo de 1958 los electores votaron por los miembros del Senado, la Cámara, las asambleas departamentales y los consejos comunales. Después de nueve años de inactividad parlamentaria el Congreso pudo por fin volver a reunirse.

Las elecciones políticas, ganadas por los liberales, fueron incluso una prueba de fuego para entender la fuerza política real de los partidos en vista de las votaciones presidenciales del siguiente mes de mayo. En el baile de las precandidaturas por la elección de un hombre capaz de sintetizar el contradictorio universo político que había derrotado a Rojas Pinilla, el líder liberal Alberto Lleras tuvo, pues, la posibilidad de prevalecer sobre el conservador Guillermo León Valencia.

El 4 de mayo –dos días después de una nueva tentativa de golpe rápidamente reprimida– Alberto Lleras confirmó los pronósticos y ganó las elecciones presidenciales. Con su posesión, el 7 de agosto, se puso



oficialmente en marcha en Colombia la época del Frente Nacional y la completa actuación de los acuerdos político-institucionales establecidos con los pactos de Benidorm y Sitges. A través del duopolio liberal-conservador, los partidos tradicionales intentaron restablecer la paz social y reconstruir el tejido democrático del país.

En un informe redactado tres días después de la posesión de Alberto Lleras como presidente, el embajador Castellani enfatizó en los obstáculos que el nuevo mandatario enfrentaría. A nivel político, el reto era superar la oposición de los grupos extremistas y el escepticismo de los conservadores que esperaban ver «hasta qué punto los liberales sacrificarían el espíritu partidista a las necesidades de la reconstrucción»; a nivel económico, las incógnitas derivarían de la difícil coyuntura que amenazaba con llevar al país «hacia violentas agitaciones sociales» (Télex 1689/428, 1957-1961, c. 47).

No obstante, la misión italiana evaluaba con optimismo el nuevo curso político y juzgaba realizables los tres objetivos de la estrategia política de Lleras: fortalecer las instituciones según la nueva fórmula del Frente Nacional, concretar la colaboración bipartidista en todas las ramas del poder público y erradicar la violencia política en las áreas rurales. Además, Roma consideraba a Alberto Lleras un hombre querido por Washington y eso hubiera podido tener un peso positivo si Bogotá hubiera solicitado apoyos económicos a los organismos internacionales (*Aiuti finanziari Usa*, 1957-1961, c. 47).

Pruebas adicionales de la confianza italiana sobre el camino político colombiano llegaron en los meses siguientes. En junio de 1958, la revista colombiana *Semana* publicó un reportaje titulado «La gran reforma agraria italiana». Los funcionarios romanos juzgaron ese «homenaje» como la prueba del interés que se le daba a los acontecimientos italianos y hasta acariciaron la ilusión de que Italia podía sugerir patrones para la reconstrucción democrática colombiana. Al final de 1958, el periódico oficial de política exterior italiana, *Relazioni Internazionali* habló abiertamente del «restablecimiento de la libertad en Colombia». La revista concluía que también Bogotá, «en el marco del proceso de democratización en marcha en toda América Latina, reconquistaba su normalidad» (pp. 1205-1206).

Para justificar su optimismo, la misión italiana no dejó de transmitir en Roma los datos que iban anunciando una leve mejora de la situación económica y financiera de Colombia¹¹. El propósito principal por

11. Con tonos menos optimistas, en marzo de 1959, también la Embajada italiana en Washington transmitió a Roma un largo informe sobre la economía colombiana. Con base en unos datos «confidencialmente suministrados por círculos del Banco Internacional», el embajador Carlo



el cual se brindaban esas evidencias era «examinar la posibilidad de un desarrollo adicional de las exportaciones» italianas en el país latinoamericano (*Appunto*, 1957-1961, c. 78). Pero la muestra de la recuperación económica, si bien aún obstaculizada por factores numéricos, inducía a mirar con confianza el nuevo ciclo de historia colombiana. Además, llevaba a concluir que el acuerdo del Frente Nacional no debía interpretarse según una lógica meramente política. Más bien, obedecía incluso a concretas razones económicas, expresadas por parte de élites que buscaban la estabilidad político-institucional para asegurar el desarrollo de las fuerzas productivas.

Al atribuir al Frente Nacional caracteres de exhaustividad, la misión italiana no tuvo dificultad en considerar el nuevo ciclo colombiano como el comienzo de una «Segunda República» (Télex 0123/38, 1957-1961, c. 78). Para la Embajada, el artífice principal de este nuevo ciclo era Alberto Lleras:

Este hombre —escribió el Embajador Castellani el 15 de enero de 1959—, quien tiene el aspecto físico de un asceta, ensambla en su temperamento, al dono de la superioridad espiritual y de una sinceridad de expresión aquí insólita [...], aquello de una fuerza de voluntad poco común, de una inusual lucidez de juicio político y de un conocimiento profundo de los problemas y de los hombres, no sólo de su país, sino también de todo el Continente (Télex 0123/38, 1957-1961, c. 78).

Según los representantes de Roma, también la proyección de Colombia en el ámbito interamericano e internacional iba a transitar por las capacidades de su mandatario. A diferencia de Rojas Pinilla —opinaba la misión—, Alberto Lleras actuaba con mayor realismo. Él no reivindicaba una incómoda posición de primacía, además en contraste con las posibilidades colombianas; más bien, tenía la inteligencia de proyectar a nivel continental las problemáticas del país y solicitar un conocimiento más profundo de las principales cuestiones interamericanas como subdesarrollo, asistencia y, en esa coyuntura, la infiltración del comunismo (Télex 4717/1617, 1957-1961, c. 103).

En resumidas cuentas, mientras que Colombia entraba en una nueva etapa de su historia, la diplomacia italiana formulaba un juicio básicamente positivo sobre el Frente Nacional y su capacidad de asegurar

Perrone Capano comunicó que, si bien existía, entre otras cosas, una mejora de la balanza de pagos y un aumento de las reservas de divisas, las disposiciones adoptadas por Bogotá a partir de 1957 eran «en gran medida financieramente no ortodoxas» y «hacían pensar en que el ciclo colombiano de la finanza sana casi iba a agotarse» (Télex 4608/1208, 1957-1961, c. 78).



al país una transición democrática. El mismo juicio a Rojas Pinilla, llevado a cabo en el Senado de la República entre agosto de 1958 y abril de 1959, fue considerado como la evidencia de que las instituciones paulatinamente estaban cobrando fuerza y legitimidad. Aun así, la misión no ocultaba su convicción de que el porvenir de la fórmula bipartidista dependería, sobre todo, de la competencia del presidente Lleras. De él y su capacidad de ampliar la adhesión de los partidos a los principios del Frente Nacional, procedería finalmente aquel que la Embajada italiana en Bogotá consideraba «el problema de la rehabilitación nacional» de Colombia (Télex 0123/38, 1957-1961, c. 78).

Discusión

Desde el mutuo reconocimiento diplomático (en los años sesenta del siglo XIX) hasta la Segunda Guerra Mundial, Colombia llamó la atención de la diplomacia italiana casi exclusivamente por su largo y conflictivo proceso de formación nacional. El tema recurrente en los informes italianos era el dualismo de las clases dirigentes. De eso, se opinaba, procedían la fragilidad del Estado, la segmentación social, la ausencia de una estructura económica fuerte y moderna y la escasa inserción internacional del país.

Desde 1945, la mirada italiana se tiñó de nuevos matices y hasta se benefició de los esfuerzos que algunos diplomáticos colombianos en Roma empezaron a hacer con el fin de proyectar una imagen virtuosa de su propio país¹². Las luchas sectarias se interpretaron a raíz de nuevas formas de antagonismo, mientras que la visión de una Colombia ensimismada fue mitigada por los elogios sobre los esfuerzos de apertura.

Bajo estas ópticas, después del Bogotazo –considerado el mayor momento de ruptura en la historia del país tras la guerra de los Mil Días– el régimen de Rojas Pinilla fue calificado como árbitro de los conflictos nacionales; un árbitro que, en lugar de acompañar la transición de un gobierno civil a otro, salió de su función conciliadora demostrando que las FF. AA. colombianas no representaban una

12. De manera paralela al interés que Italia vino demostrando por Colombia –sobre todo con relación a la posibilidad de destinarle cuotas crecientes de inmigrantes italianos–, la representación de Bogotá en Roma se comprometió a corregir esa imagen de país atrasado y sumiso a la *Violencia* que algunos publicistas y periódicos de la Península solían reproducir. Entre los funcionarios colombianos que, a lo largo de los años cincuenta, más actuaron en tal sentido estuvieron el primer secretario de la Embajada Álvaro Ortiz Lozano y el embajador Germán Arciniegas (AGN, fondo MRE, carpeta 28, caja 594 y carpeta 39).



excepción en el panorama latinoamericano. Los uniformados no eran más aquellos de la primera parte del siglo, fruto de la «misión chilena»¹³ contratada por el presidente Reyes; más bien, habían adquirido capacidades técnicas, organizativas y políticas para ampliar su función profesional al campo de la competencia política. En seguida, se valoró al Frente Nacional ante todo como una alianza burguesa necesaria para acabar con el conflicto que había desangrado la nación y para controlar las transformaciones socioeconómicas. La misión no desestimó el faccionalismo y las divisiones internas que los partidos tradicionales sufrían; mejor dicho, las consideró un desafío para la consolidación de las instituciones *frentenacionalistas* y la fórmula bipartidista de la responsabilidad compartida. Sin embargo, para la Embajada las fracturas internas no eran la expresión de «razones ideológicas, ni siquiera de evaluaciones objetivas de los problemas y de los medios aptos para solucionarlos»; más bien, respondían a «rencores personales» y a una extensión de «las viejas luchas políticas basadas en el caudillismo» (Télex 3915/893, 1957-1961, c. 103). Por otro lado, se interpretó la internacionalización paulatina de Bogotá como la prueba de una mayor madurez de sus clases dirigentes. Estas, según los diplomáticos italianos, habían entendido no solo los beneficios que derivarían de una mayor inserción mundial, sino también la posibilidad de sacar ventaja incluso en negociaciones asimétricas como las que se daban con los Estados Unidos.

Con esta clase de análisis, la misión italiana confirmaba que seguía interesada en la evolución de los caracteres nacionales colombianos. Lamentablemente, nunca esta atención fue respaldada por Roma y no logró traducirse en una juiciosa actitud de compromiso con la implementación de la democracia en el país latinoamericano. Resultó ilustrativo al respecto el desahogo que, en agosto de 1959, dirigió el embajador Augusto Castellani al funcionario del Ministerio, Alessandro Marieni. El representante italiano se quejó por la incapacidad de dedicar a Colombia una atención seria y constante, coherente con esa nueva política para América Latina que a finales de 1957 Italia había pretendido inaugurar con la reunión en Montevideo de todos sus jefes de misión acreditados en la región (Palamara, 2015b, pp. 105-136). La república andina, según Castellani, seguía sin tener algún eco en la Península; los periódicos italianos eran los únicos de los grandes Estados europeos que no enviaban sus publicaciones a las mayores redacciones colombianas y que guardaban silencio sobre los

13. Al respecto véanse sobre todo Deas (2017; 2015).



acontecimientos del país latinoamericano, incluso los más importantes (Augusto Castellani, 1957-1961, c 47).

Sea como fuere, al mirar la historia colombiana a mediados del siglo xx, los diplomáticos italianos parecían plantearse una pregunta precisa: ¿Por qué la modernización social y económica colombiana no caminaba en paralelo con la de las instituciones políticas? La respuesta, condensada en los informes, sugería la idea de una Colombia atravesada por un proyecto de transformación burgués sin haber superado los antagonismos de la fase oligárquica.

Referencias

- Abel, C. & Palacios, M. (2002). Colombia 1930-1958. En L. Bethell (Ed.). *Historia de América Latina. 16 Los países andinos desde 1930* (pp. 173-208). Barcelona: Crítica.
- Aiuti finanziari Usa* (1957-1961). [Manuscrito]. En ADMAE, DGAP, Colombia, c. 47.
- Alape, A. (1983). *El Bogotazo. Memorias del olvido*. Bogotá: Editorial Pluma.
- Appunto* (1957-1961). [Manuscrito]. En ADMAE, Dirección General Asuntos Políticos -DGAP, Colombia, c. 47.
- Appunto* (1957-1961). [Manuscrito]. En ADMAE, Dirección General Asuntos Políticos -DGAP, Colombia, c. 78.
- Atehortúa Cruz, A. L. (2008). Colombia en la guerra de Corea. *Folios*. (27), pp. 63-76.
- Atehortúa Cruz, A. L. (2010, primer semestre). El golpe de Rojas y el poder de los militares. *Folios*. Segunda época (31), pp. 33-48.
- Ayala Diago, C. A. (1990-1991). El discurso de la conciliación: análisis cuantitativo de las intervenciones de Gustavo Rojas Pinilla entre 1952-1959. *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura* (18-19), pp. 205-243.
- Ayala Diago, C. A. (1992). El movimiento de Acción Nacional: movilización y confluencia de idearios políticos durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura* (20), pp. 44-70.
- Ayala Diago, C. A. (2013). *Democracia bendita seas. Gilberto Alzate Avendaño, liberado. 1950-1960*. Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño.
- Borda, S. & Tickner, A. B. (Eds.). (2011). *Relaciones Internacionales y políticas exterior de Colombia*. Bogotá: Universidad de los Andes.



- Buitrago, R. E. (2006). La política exterior de Colombia en el siglo xx. Un breve repaso histórico a nuestra política internacional. *Suma administrativa*, 1 (1), pp.111-131.
- Bushnell, D. (1994). *Colombia, una nación a pesar de sí misma: De los tiempos precolombinos a nuestros días*. Bogotá: Editorial Planeta.
- Camacho Arango, C. (2015). Colombia en el mundo. En M. Deas (Coord.). *Mirando hacia dentro* (pp. 81-148). Tomo IV de la obra dirigida por E. Posada Carbó, *Colombia*. Madrid: Fundación Mapfre.
- Cassinis, A. (19 de abril de 1947). [Carta de Cassinis a Vittorio Zoppi]. En ASDMAE, Serie Asuntos Políticos, SAP, (1946-1950), *América Latina*, c. 8.
- Castellani, A. (1957-1961). [Carta a Alessandro Marieni]. En ADMAE, DGAP. Colombia, c 47.
- Cavelier, G. (1997). *Política Internacional de Colombia 1820-1997*. IV t. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Deas, M. (2015). La vida política. En M. Deas (Coord.). *Mirando hacia dentro* (pp. 30-73). Tomo IV de la obra dirigida por E. Posada Carbó, *Colombia*. Madrid: Fundación Mapfre.
- Deas, M. (2017). *Las fuerzas del orden y once ensayos de historia de Colombia y las Américas*. Bogotá: Ediciones Taurus.
- Di Nolfo, E. (2003). La política estera italiana tra interdipendenza e integrazione. En A. Giovagnoli & S. Pons (Eds.). *Tra guerra fredda e distensione* (pp. 17-27). Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Foreign Relations of the United States, FRUS* (1952-1954). [Diplomatic Papers]. Vol. IV, pp. 812-816.
- Foreign Relations of the United States, FRUS* (1955-1957). [Diplomatic Papers]. Vol. VII.
- Galeano David, H. J. (2012, enero-junio). La política exterior colombiana: una institución estancada en la historia. *Revista de economía del caribe*, (9), pp. 201-235.
- Galvis, S. & Donadio, A. (2002). *El jefe supremo. Rojas Pinilla en la Violencia y en el poder*. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial.
- González Arana, R. (2004). La política exterior de Colombia a finales del siglo xx. Primera aproximación. *Investigación y desarrollo*. 12 (2), pp. 258-285.
- Henderson, J. (2006). *La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- Informe para el Gabinete de S. E. el Ministro* (1951-1957). [Informe]. En ADMAE, SAP, *Colombia*, c. 1585.



- Informe político*, Roma (21 de febrero de 1958). [Informe]. En AGN, Fondo MRE, carpeta 37, caja 595.
- Informe sobre la Política exterior de Italia*, Roma (14 de febrero de 1949). [Informe]. En Archivo General de la Nación - AGN, fondo Ministerio Relaciones Exteriores - MRE, carpeta 27, caja 594.
- Incisa di Camerana, L. (2003). Il risveglio della democrazia in America Latina. En E. Di Nolfo (Ed.). *La politica estera italiana negli anni Ottanta* (pp. 151-161). Manduria: Piero Lacaita.
- La Bella, G. (2010). L'Italia e l'America Latina. En A. Giovagnoli & L. Tosi (Eds.). *Amintore Fanfani e la politica estera italiana* (pp. 395-413). Venezia: Marsilio.
- Meléndez Camargo, J. D. (2015, enero-junio). Colombia y su participación en la Guerra de Corea: Una reflexión tras 64 años de inicio del conflicto. *Historia y Memoria*, (10), pp. 199-239.
- Ministerio de Relaciones Exteriores, República de Colombia (1952). La política internacional de Colombia 1951-52, suplemento *Noticias de Colombia*, (96), p. 5.
- Palamara, G. (2015a, julio-diciembre). La sugestión del mussolinismo en la experiencia formativa y política de Jorge Eliécer Gaitán. *Criterio Libre*, 13 (23), pp. 23-38.
- Palamara, G. (2015b). La primera década de la Comunidad Económica Europea: propuestas de una mediana potencia europea para no olvidar a América Latina. En E. Tremolada Álvarez (Ed.). *La arquitectura del ordenamiento internacional y su desarrollo en materia económica* (pp. 105-136). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Pécaut, D. (2012). *Orden y violencia: Colombia 1930-1953*. Medellín: EAFIT.
- Respreto Pietrahíta, C. (1976). *25 años de evolución político-constitucional: 1950-1975*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Rouquié, A. (1984). *El Estado militar en América Latina*. Buenos Aires: Emecé.
- Sáenz, E. (2002). *Colombia años 50. Industriales, política y diplomacia*. Bogotá: Universidad Nacional.
- Semana* (22 de julio de 1958). La gran reforma agraria italiana, (605).
- Silva Luján, G. (1989). El origen del Frente Nacional y el gobierno de la Junta Militar. En A. Tirado Mejía (Ed.). *Nueva Historia de Colombia. Historia Política 1946-1986* (pp. 179-210). Bogotá: Planeta.
- Silva Téllez, A. (1999). *Cultura italiana en Colombia: reflexión sobre etnias y mestizajes culturales*. Bogotá: Tercer Mundo.



- Situazione politica, Bogotá* (16 de septiembre de 1954). [Informe]. En ADMAE, SAP, 1951-1957, *Colombia*, c. 1611.
- Tamburini, F. (2000). La cuestión Cerruti y la crisis diplomática entre Colombia e Italia (1885-1911). *Revista de Indias*, LX (220), pp. 709-733.
- Télex 8/4251 (1951-1957). En ADMAE, SAP, Colombia, c. 1623.
- Télex 271/65 (1951-1957). En ADMAE, SAP, Colombia, c. 1573.
- Télex 1426/252 (1951-1957). En ADMAE, SAP, Colombia, b. 18
- Télex 1679/367 (1951-1957). En ADMAE, SAP, Colombia, 1611.
- Télex 1868/597 (1951-1957). En ADMAE, SAP, Colombia, 1585.
- Télex 1964/626 (1951-1957). En ADMAE, SAP, Colombia, c. 1585.
- Télex 2037/544 (1951-1957). En ADMAE, SAP, Colombia, c. 1597.
- Télex 2303/594 (1951-1957). En ADMAE, SAP, Colombia, c. 1597.
- Télex 2467/800 (1951-1957). En ADMAE, SAP, Colombia, c. 1585.
- Télex 3278/811 (1951-1957). En ADMAE, SAP, Colombia, c. 1597.
- Télex 3632/672 (1951-1957). En ADMAE, SAP, Colombia, c. 1636
- Télex 3690/c (1951-1957). En ADMAE, SAP, Colombia, c. 1597.
- Télex 3766/695 (1951-1957). En ADMAE, SAP, 1951-1957, *Colombia*, c. 1636.
- Télex 3915/893 (1951-1957). En ADMAE, DGAP, 1957-1961, *Colombia*, c. 103.
- Télex 41/11405 (1951-1957). En ADMAE, SAP, 1951-1957, *Colombia*, c. 1636.
- Télex 5632/672 (1951-1957). En ADMAE, SAP, 1951-1957, c. 1636.
- Télex 0123/38 3915 (1951-1957). En ADMAE, DGAP, c. 78.
- Télex 1689/428 (1957-1961). En ADMAE, DGAP, Colombia, c. 47.
- Télex 4608/1208 (1957-1961). En ADMAE, DGAP, c. 78.
- Télex 4717/1617 (1957-1961). En ADMAE, DGAP, c. 103.
- Tirado Mejía, A. (1989a). El gobierno de Laureano Gómez, de la dictadura civil a la dictadura militar. En *Nueva Historia de Colombia. Vol. II, Historia política 1946-1986* (pp. 81-104). Bogotá: Planeta.
- Tirado Mejía, A. (1989b). Rojas Pinilla: del golpe de opinión al exilio. En *Nueva Historia de Colombia. Vol. II, Historia política 1946-1986* (pp. 105-126). Bogotá: Planeta.
- Trejos Rosero, L. (2011). Comunismo y anticomunismo en Colombia durante los inicios de la Guerra Fría (1948-1966). *Tiempo Histórico*, (3), pp. 85-103.
- Varsori, A. (1998). *L'Italia nelle relazioni internazionali dal 1943 al 1992*. Roma-Bari: Laterza.